

**ORDEN****NÚMERO 095/2023**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Unidad Administrativa
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN**Exp.: CD19AM003/18**

PRIMERO.- Mediante Orden 1156/2018, de 16 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familias, corregida mediante orden 1158/2019 de 17 de agosto, se adjudicaron a la entidad Centro de Día Caramuel S.L. (B84086545), 45 plazas del “Acuerdo Marco del Servicio Público de Atención a Personas Mayores Dependientes en Centros de Día. Año 2019”, con una vigencia de dos años, prorrogado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 en el centro de día Caramuel (C3170), situado en la calle Caramuel, 64 28011 Madrid.

Al amparo de dicho Acuerdo Marco, a fecha 20 de septiembre de 2022 la Consejería de Políticas Sociales y Familia tienen suscrito un contrato por un total de 42 plazas en el citado centro, correspondiente a la prórroga del contrato derivado, con un plazo de ejecución de 494 días.

Al amparo de dicho Acuerdo Marco, a fecha 11 de octubre de 2021 la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad tienen suscrito un contrato por un total de 17 plazas en el citado centro.

SEGUNDO.- Con fecha 20 de septiembre de 2022, en el ejercicio de las funciones de seguimiento y control de la ejecución del contrato, se realiza una visita al centro por un técnico de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia.

Como consecuencia de la citada visita, se emite informe técnico en el que se señala que la presencia física del personal de atención directa supone una ratio del 0,18.

La ratio se ha calculado sobre el número de profesionales que han prestado servicios, según la documentación de fichajes aportada por el centro y una ocupación media de 48 usuarios, todo ello durante el periodo del 12 al 16 de septiembre de 2022

TERCERO.- A la vista de lo anterior, con fecha 4 de noviembre de 2022, la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, comunicó a la entidad, a los efectos del trámite de audiencia y alegaciones, la siguiente propuesta de imposición de penalidades:

“1.- La tipificación de los hechos como incumplimiento de la obligación contractual descrita en el punto 2.1, del apartado 20.A de la cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato.

2.- Atendiendo al grado de incumplimiento en relación a la ratio exigida y de acuerdo con lo previsto en el punto 2.1 del apartado 20.A de la cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se propone una penalidad del 0,38% de la BP, esto es, 2.974,72 euros, como resultado de los siguientes cálculos:

0,38% (42 plazas x 37,73 euros/plaza y día x 494 días de ejecución)”

En dicha comunicación se concede a la entidad 10 días para efectuar las alegaciones que tenga por convenientes.

CUARTO.- Con fecha 11 de noviembre de 2022 la entidad presentó escrito de alegaciones.

QUINTO.- La Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, con fecha 11 de diciembre de 2022, ha elevado propuesta de imposición de penalidades al órgano de contratación, por importe de 2.974,72 euros derivada del incumplimiento citado, ya que las alegaciones efectuadas por la entidad no han desvirtuado los hechos objeto de imposición de penalidad, ni su cuantía.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276732272180134998824**

En primer lugar, la entidad alega el olvido de fichaje de alguno de los trabajadores que se encontraban en el centro, así como un error en el cómputo de usuarios durante la semana objeto de cálculo de la ratio, de los que no supo informar adecuadamente la persona que acompañó la visita en sustitución de la directora del centro, ausente en ese momento.

Hay que señalar, respecto a este último punto, que el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el contrato, prevé esta circunstancia en el apartado X.4 donde se establece que “en la organización y funcionamiento del centro deberá preverse la existencia de una figura con atribuciones suficientes para que, en ausencia del director/a asuma la representación de la entidad adjudicataria ante el personal, los usuarios, sus familiares y la Consejería de Políticas Sociales y Familia”

De esta forma, los cálculos realizados que se detallan en el antecedente de hecho segundo, lo son en base a la información documental aportada por el centro el día de la visita de seguimiento, tanto en lo referido al control de fichajes del personal, como sobre el número de usuarios, referidos al periodo del 12 al 16 de septiembre de 2022. No cabe, por tanto, aludir, como hace la entidad, a problemas organizativos o a datos y registros aportados a posteriori al momento de la visita del técnico, ya que, además de contradecir los datos aportados en ese momento, en la práctica, esto haría imposible la labor efectiva de seguimiento y control del correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad.

Por otro lado, la propia entidad en su escrito de alegaciones reconoce el incumplimiento de la obligación contractual de disponer del servicio de enfermería con presencia física y menciona las circunstancias de dificultad para la contratación de estos profesionales, que dieron lugar a dicho incumplimiento. No obstante, la entidad debe conocer las condiciones a las que viene obligado para el correcto cumplimiento de las prestaciones del contrato suscrito, que se concretan en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que deben ser previstas y cumplidas de forma continuada desde el inicio y durante todo el tiempo de vigencia del contrato, por lo que no cabe alegar problemas en el mercado laboral u otras circunstancias organizativas para su cumplimiento.

SEXTO.- Una vez desestimadas las alegaciones formuladas por la empresa contratista y constatados los incumplimientos contractuales producidos, cabe señalar que El Pliego de Prescripciones Técnicas del Acuerdo Marco señala en el apartado VIII. *Medios que debe aportar el adjudicatario para la prestación del servicio*, que:

[...]

4.- *La plantilla disponible para atender a los usuarios debe ser tal que asegure una ratio mínima de personal de atención directa de 0,23 sumando a todos los profesionales de atención directa (médico, enfermeros, gerocultores, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas y gerocultora acompañante del servicio de transporte) y opcionalmente psicólogo, trabajador social y animador sociocultural.*

[...]

En el cálculo de la ratio se incluirá al personal citado que se encuentre prestando sus servicios de manera efectiva en el centro durante el periodo de cómputo.

El cálculo se realizará computando cada efectivo en la equivalencia que corresponde según la proporción entre su jornada de trabajo y el 100% de la jornada anual según el convenio colectivo aplicable.

En el denominador para el cálculo de la ratio se computarán todos los usuarios del centro en el periodo de cálculo de la ratio. A tal efecto se tendrán en cuenta todas las plazas realmente adjudicadas a usuarios independientemente de que en el momento del cómputo los usuarios se encuentren ausentes por enfermedad, ingreso hospitalario o permiso de ausencia reglamentario.

SÉPTIMO.- El hecho descrito en el apartado SEGUNDO de esta Orden se tipifica como una de las infracciones descritas en el punto 2.1, del apartado 20.A.2 de la cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el Acuerdo Marco, a cuyo tenor:

“2. Se podrá imponer una penalidad de hasta el 0,5 % del BP en los siguientes casos:

2.1. Por la utilización de medios personales inferiores a los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.”



El párrafo segundo del citado apartado establece que la base económica de penalización (en adelante, BP) se calculará sobre el total de las plazas contratadas al adjudicatario en el centro en el que se haya producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso y en el momento en que se haya producido el hecho que dé lugar a las mismas, valoradas al presupuesto de licitación (37,73 euros plaza adjudicada y día) en cálculo de número de días de ejecución, es decir, se aplicará la siguiente fórmula: $BP = \text{Plazas contratadas} \times 37,73 \text{ euros plaza ocupada/día} \times \text{nº de días de ejecución}$.

En cuanto a su cuantía y forma de cálculo de la penalidad se mantiene lo establecido en la Comunicación del Director General de Atención al Mayor y a la Dependencia de 4 de noviembre de 2022 y que se reproduce en el punto tercero de esta Orden.

De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con la propuesta de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, en aplicación del art. 212.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y del apartado 20 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rige el citado Acuerdo Marco.

DISPONGO

Imponer a la entidad CENTRO DE DÍA CARAMUEL S.L. (B84086545), una penalidad por importe de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (2.974,72 euros) por incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el Acuerdo Marco.

De acuerdo con el artículo 212.8 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la penalidad se hará efectiva mediante la deducción de las cantidades que en concepto de certificaciones mensuales deban abonarse al contratista, o sobre la garantía que se haya constituido cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Fecha:

18 de enero de 2023

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD
Y POLÍTICA SOCIAL

(P.D. Orden 1558/2021, de 28 de septiembre, BOCM nº 239, de 07/10/2021)

EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN AL MAYOR Y
A LA DEPENDENCIA

